Una reforma educativa inasumible

Al parecer del Gobierno de la nación, dos de los grandes problemas que requieren la reforma urgente de la LOE, en la redacción dada por la Lomce, son la asignatura de Religión y la escuela concertada. Parece ser que la reforma de estas dos cuestiones mejorará sustancialmente el sistema educativo.

Una reforma que se pretende imponer sin diálogo con la comunidad educativa. La apertura de un exiguo plazo para hacer aportaciones a un documento publicado por el Ministerio de Educación, que no coincide con las propuestas a implantar, no puede tomarse sino como una falta de respeto a los ciudadanos y la expresión de las intenciones del Gobierno.

Ocurre que la afeción que la reforma pretende a la asignatura de Religión y al principio de la demanda social para la concertación y el mantenimiento de unidades en la escuela concertada, constituye un paso más hacia la configuración de un sistema educativo basado en el axioma de una escue-

la única, pública y laica. Un modelo bajo la premisa del monopolio estatal de una educación moralmente neutra, contrario a los valores proclamados por el artículo 27 de nuestra Constitución y que esconde en sí mismo una opción ideológica concreta.

No olvidemos que la asignatura de Religión no está presente en la escuela, sea pública o concertada, por un privilegio de las distintas confesiones religiosas de nuestro país, sino por tratarse de un derecho de los padres proclamado en nuestra Constitución (art. 27.3) y en los tratados internacionales suscritos por España.

Igualmente, la atención a la demanda social está destinada a garantizar un sistema de pluralidad de escuelas orientado a dar satisfacción a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la efectividad de los valores constitucionales de libertad y pluralismo, configurando así la doble red complementaria de centros públicos y privados concertados.

La reforma propuesta pone en

grave riesgo la pluralidad de nuestro sistema educativo, porque el pluralismo constituye un presupuesto esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la educación en libertad. Un pluralismo educativo que, como señaló el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es «esencial para la preservación de la sociedad democrática» y por ello la Constitución no impone que la efectividad del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza se logre solo a través de un servicio público educativo con carácter exclusivo y excluyente.

La reforma a imponer sin diálogo alguno por el Ministerio de Educación, en su forma y en su fondo, es inasumible para la escuela católica concertada, al suponer un ataque frontal a la libertad de enseñanza y a los derechos fundamentales de las familias, y por ello ser profundamente contraria a los valores constitucionales.

*José Manuel Murgoitio
es responsable de comunicación
de Escuelas Católicas Aragón*